

Este texto es una versión previa del capítulo:

Mantecón, A. (2017). "Claves sociológicas para entender el turismo en la Comunidad Valenciana". En M.D. Pitarch, T. González y J. Hermosilla (coords.) *Las claves del turismo en la Comunitat Valenciana*. Valencia: Tirant Humanidades, pp. 81-93.

CLAVES SOCIOLOGICAS PARA ENTENDER EL TURISMO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Alejandro Mantecón

Departamento de Sociología I, Universidad de Alicante

INTRODUCCIÓN

La toma de cualquier decisión estratégica en el ámbito de la gestión turística ha de tener en cuenta algunos aspectos fundamentales que caracterizan y determinan las dinámicas operantes en la región. A continuación se presenta un argumento explicativo en el que se ofrecen claves sociológicas, obtenidas como resultado del trabajo de investigación realizado en los últimos años, sobre las que conviene reflexionar antes de diseñar la implementación de medidas concretas.

La acertada síntesis de características del sistema turístico valenciano elaborada por Obiol y Pitarch (2011, 196-198) puede reconocerse como el telón de fondo de este texto. Aquí, no obstante, en lugar de plantear una discusión alrededor de una lista de factores, se ha optado por desplegar un hilo conductor a partir del asunto que define más intensamente el contexto de alternativas posible: el problema que supone la penetración e instrumentalización del sistema turístico valenciano por la industria inmobiliaria.

LA ESPECIALIZACIÓN RESIDENCIAL

La Comunidad Valenciana es el tercer destino turístico de España (por detrás de Cataluña y Andalucía) en número de viajes nacionales y extranjeros (casi 23 millones) y de pernoctaciones (155 millones) (datos de Frontur para 2014). La posición desciende hasta el quinto puesto si se consideran únicamente a los turistas extranjeros. Sin embargo, al observar las cifras de alojamiento en vivienda propia ocupa el primer puesto tanto para el turismo nacional (30 millones de pernoctaciones) como extranjero (20 millones) y el segundo lugar para quienes lo hacen en viviendas de familiares o amigos. De hecho, de los 6,3 millones de turistas extranjeros que la Comunidad Valenciana recibió en 2014: 1,1 millones se alojó en vivienda propia, 1,7 en vivienda de familiares y amigos y casi otro millón en vivienda de alquiler (Agencia Valenciana de Turismo a partir de Egatur).

La complacencia con la que las autoridades políticas y ciertos sectores empresariales han valorado la evolución de los datos que ilustran la

dimensión adquirida por el residencialismo, así como la interpretación de los mismos como estadísticas turísticas por las agencias e institutos oficiales, contrasta con la investigación acumulada por los académicos acerca de los efectos regresivos que la especialización residencial genera en la región. Se han analizado con especial atención sus impactos sobre el medio ambiente, los riesgos asociados y las implicaciones para la ordenación del territorio (CAPDEPÓN, 2016; MEMBRADO, 2011; VERA, 2005a; VERA e IVARS, 2003), los problemas de gestión pública provocados por la proliferación de procesos de fragmentación social y de estrategias residenciales en las que se confunden los límites entre la migración y el turismo (HUETE y MANTECÓN, 2010, 2011, 2012, 2013; MEMBRADO, 2015) o la escasa rentabilidad que a medio y largo plazo ofrecen a las sociedades locales los municipios estructurados económicamente en torno a la masiva construcción de viviendas supuestamente destinadas a un uso turístico (PERLES et al., 2016).

En realidad, las implicaciones socioeconómicas más evidentes, que a su vez conceden un carácter distintivo al modelo valenciano, tienen que ver con el desequilibrio existente entre, por un lado, la oferta reglada de alojamiento -vinculada principalmente a hoteles y apartamentos registrados para su uso turístico- y, por otro, la oferta muy superior de alojamiento no reglado -ligada a viviendas particulares integradas en una economía inmobiliaria informal-. Al respecto, escribe Vicente Mas (2015, 5): «En otras áreas en las que la industria turística está más profesionalizada, la presencia de segunda residencia se considera un hándicap para la actividad turística, pero en la Comunidad Valenciana, la presencia de segunda residencia es especialmente bien valorada por las instituciones públicas, sobre todo por los ayuntamientos con importantes asentamientos en la zona costera de su municipio». No en vano, durante los veinte años anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria la mayor parte de los consistorios de los municipios costeros se acostumbraron a equilibrar sus presupuestos con los ingresos que generaban los impuestos urbanísticos derivados de la expansión residencial. Al mismo tiempo, y amparados por la transferencia de las competencias en materia urbanística hacia los gobiernos municipales, muchos de esos ayuntamientos se sirvieron, para crear empleo y obtener los réditos electorales deseados, de una estrategia tan simple y poco imaginativa como eficaz a la par que suicida: evitar las principales restricciones planificadoras y obviar los criterios de sostenibilidad que pudieran dificultar la producción del mayor suelo urbano en el menor tiempo posible, con el fin de ponerlo a disposición de promotores inmobiliarios ajenos al negocio turístico, por mucho que políticos y empresarios insistiesen (y lo siguen haciendo) en presentar como promoción turística ante la opinión pública una lógica de actuación consistente en la edificación de viviendas particulares, sabedores los unos y los otros de que es más sencillo obtener el respaldo ciudadano necesario para apoyar un proyecto de desarrollo local sostenido sobre el turismo que para apoyar otro que lo hace sobre el negocio inmobiliario.

Los meritorios esfuerzos llevados a cabo durante el presente siglo con el propósito de diversificar la oferta turística de la región y adaptarla a un contexto postfordista se han visto constreñidos de diversas formas por las inercias preexistentes, extendidas hasta el paroxismo a lo largo de la conurbación litoral: aproximadamente un 65% del frente litoral que va desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada se corresponde con suelo urbano consolidado, ocupado con tipologías en su mayoría residenciales. La consecuencia más evidente, desde el punto de vista de la gestión turística, es la drástica reducción del margen de maniobra disponible para reorientar los desarrollos futuros.

ESTRUCTURAS LATENTES

Tras las repercusiones manifiestas y reconocibles pueden advertirse unas estructuras latentes de explicaciones y justificaciones, históricamente configuradas, que sustentan la expansión residencial. El objetivo ahora es entender los rasgos básicos de esas estructuras y, en el siguiente apartado, discutir algunas vías de trabajo.

Si bien se pueden distinguir unos discursos inequívocamente críticos producidos desde hace décadas por los estudiosos de estas realidades, y compartidos por algunos sectores sociales, no es posible negar que esos discursos se insertan en un contexto social más amplio de legitimación de la economía turístico-inmobiliaria. Ese contexto se apoya en un marco cultural de actitudes y valores proclives a defender las formas de proceder que, durante casi medio siglo, han contrastado su eficacia a la hora de generar riqueza y mejorar las condiciones materiales en las que discurre la vida cotidiana de miles de personas (MANTECÓN, 2008, 2010, 2012). Las razones que explican la existencia de esta realidad están ligadas a una situación gestada en el último tercio de la dictadura franquista y proyectada de manera espectacular en la democracia: la producción de una gran confusión entre el significado del desarrollo turístico y la naturaleza del negocio inmobiliario. Se comentan a continuación dos de esas razones: el uso que se ha dado de la expresión «turismo residencial» y la funcionalidad de una actividad económica caracterizada por la informalidad.

¿Existe el turismo residencial?

A finales de la década de 1990 y muy especialmente en los primeros años del presente siglo, el uso de la expresión «turismo residencial» comenzó a constituirse en un motivo de disputa que trascendía los límites de las discusiones académicas, pues la identificación con una herramienta analítica relativamente polémica quedó enturbiada al ser el término reclamado y utilizado como herramienta publicitaria por el marketing inmobiliario. El uso publicitario del concepto por parte de las élites político-económicas más interesadas en promover el negocio inmobiliario se comprende mejor si se inserta en el marco de las nuevas

estrategias empresariales que en aquella época adoptaban tanto las corporaciones del sector inmobiliario como algunas de las más poderosas del turístico (FUSTER et al., 2010; MURRAY, 2015; RAMÓN, 2002, 2010). El resultado de esa operación ha dado lugar a una situación de aparente confusión tras la cual se advierte la pretensión de constituir un discurso hegemónico que presente al turismo residencial como una actividad empresarial de naturaleza en esencia turística, asociada a la producción de beneficios sociales y prosperidad económica. La lógica que subyace es la siguiente: si las élites referidas han visto socavada su autoridad como prescriptoras a causa de los desmanes que la economía inmobiliaria intensificó en los años previos al estallido de la burbuja -hasta colapsar el sistema-, el mismo entramado político e inmobiliario podría igualmente ayudar a reactivarlo, aunque ahora reforzando su presentación pública como promotor del desarrollo turístico.

La expresión turismo residencial está integrada por dos términos que aluden a realidades contradictorias. Sin embargo, al presentarse como una etiqueta coherente que hace referencia a una tipología turística generadora de riqueza y empleo se diluyen los elementos problemáticos que cuestionan la naturaleza del conjunto de realidades a las que los académicos suelen hacer referencia cuando emplean el concepto. A partir de ese momento, los agentes más interesados en promover las dinámicas turístico-residenciales redefinen cualquier crítica al turismo residencial como una crítica a las alternativas de progreso que puede crear la industria turística. La repetición del carácter turístico del turismo residencial no tiene que hacerse explícita pues el propio concepto ya incluye el sustantivo «turismo». Sólo se requiere producir la armonía de la que inicialmente carecen dos términos discordantes mediante la implementación de estrategias publicitarias destinadas a eliminar cualquier atisbo de conflicto o contradicción. En este sentido, pueden recordarse todas las vallas publicitarias en las que se combina un texto orientado a vender casas y captar flujos de migración residencial con imágenes asociadas a experiencias turísticas.

¿Acaso el turismo residencial carece de elementos constitutivos de naturaleza turística? La respuesta es negativa, evidentemente. Lo que aquí se argumenta es que determinados grupos de interés sobredimensionan esos elementos a la vez que encubren, cuando no obvian, los de naturaleza no turística. Es decir, se está de acuerdo con la sentencia que afirma que el turismo residencial es un fenómeno de naturaleza parcialmente turística, pero semejante aseveración no responde a preguntas importantes. Entonces, ¿es posible cuantificar de algún modo el peso del componente turístico del turismo residencial? Sí. En realidad ya se ha intentado y se han obtenido datos relevantes, aunque parciales, como no puede ser de otra manera al tratar con un conjunto de actividades muy escurridizas dada su gran incrustación en la informalidad y el subregistro. Para la provincia de Alicante, las últimas estimaciones indirectas realizadas señalan que casi las tres

cuartas partes de las pernoctaciones registradas se dan en alojamientos no reglados, haciendo los extranjeros (48%) un gasto medio de 44 euros y los españoles (52%) de 31 euros (RAMÓN et al., 2016). En cuanto a la demanda internacional, Huete (2009) y Huete y Mantecón (2010, 2012) publicaron unos resultados clarificadores a partir del análisis de los datos recogidos mediante una encuesta realizada en 2005, durante la última fase de expansión de la burbuja turístico-inmobiliaria (la muestra de 872 entrevistados era estadísticamente representativa de un universo poblacional compuesto por ciudadanos nacionales de alguno de los 25 países pertenecientes a la Unión Europea en 2005, excepto España, en situación de inactividad laboral -jubilados, pensionistas y amas de casa-, alojados en vivienda particular en 8 municipios de la provincia de Alicante caracterizados por registrar un elevado porcentaje de viviendas secundarias). El análisis permitió apreciar cómo, al tomar en consideración los vínculos administrativos establecidos con España, el 67,9% de las personas susceptibles de ser catalogadas como «turistas residenciales internacionales» se ajustaban con más facilidad a un estatus de residente que al de un turista, siendo únicamente un 10,9% los encuestados que encajaban con claridad en un estatus de turista. Se trata de una investigación concreta asociada a un contexto específico, pero los datos son ilustrativos e invitan a la reflexión. Por lo que toca al lado de la oferta, se ha estimado que el alojamiento residencial encauzado en la oferta turística reglada es mucho menor que aquel otro que escapa a la legalidad vigente. Según los cálculos estimados por Juan Requejo (2007) en los años de máxima actividad constructora, para el conjunto del Estado la oferta de alojamiento no reglado multiplicaba por entre 4 y 7 a la de alojamiento reglado, por lo que no parece descabellado pensar que en la Comunidad Valenciana la disparidad fuese mayor. Así, el llamado turismo residencial se convertiría en la práctica en una actividad situada principalmente al margen de la ley y fomentada por empresas o particulares que poco tienen que ver con el negocio turístico. Del mismo modo, debe prestarse atención al hecho de que, como apuntan Fernando Vera y Daniel Díez, «no todas estas viviendas se pueden considerar turísticas en sentido estricto ya que un considerable número de dichas unidades de alojamiento son de uso vacacional y segunda residencia, utilizadas exclusivamente por sus propietarios y, por tanto, no pueden calificarse como oferta turística ni tendría sentido su declaración como alojamiento comercializable» (VERA y DÍEZ, 2016, 86).

La funcionalidad de la informalidad

En el momento de escribir estas líneas ya es una obviedad plantear que los nexos establecidos entre el turismo y el negocio inmobiliario se caracterizan en la Comunidad Valenciana por haber generado una extensa red de economía informal que ha resultado funcional para la estabilidad social y política de la región. Por lo tanto, el contexto de legitimación social al que se aludía más arriba no se forma únicamente como consecuencia de la exposición de la población a una serie de

mensajes ideológicos repetidos desde los medios de comunicación y la publicidad, también se asienta sobre la constatación de una realidad socioeconómica en virtud de la cual la propagación de dinámicas informales ha servido para que miles de personas experimenten una modernización de las estructuras socioeconómicas basada en el tránsito desde sistemas sociales sustentados en el sector primario y, excepcionalmente, en un sector industrial incipiente, a otros que lo hacen alrededor de la actividad constructora y de un sector servicios caracterizado por requerir trabajadores escasamente cualificados, por haberse mostrado muy eficaz a la hora de integrar mano de obra femenina y por ofrecer unas condiciones de trabajo precarias, especialmente a las mujeres (HUETE et al., 2016; SIGÜENZA et al., 2013).

La informalidad, escribe Alejandro Portes, se puede definir como «una respuesta de la sociedad civil a la interferencia no deseada del Estado» (PORTES, 2013, 201). La existencia de un sector significativo de economía informal es un síntoma de un conflicto gestado alrededor del incumplimiento de expectativas recíprocas entre el orden institucional que constituye el Estado y la sociedad sobre la que éste ejerce influencia: «Una sociedad acostumbrada a una forma de empleo con salarios regulares, que canaliza sus demandas a través de los sindicatos y de otras asociaciones formales, y que hace frente a las recesiones económicas mediante subsidios de desempleo y otras prestaciones sociales del Estado, es poco probable que desarrolle una economía sumergida y será más proclive a denunciar a aquellos que participan en ese tipo de actividades» (PORTES, 2013, 186). Por eso, no resulta extraño que el concepto «economía informal» se acuñara a partir de la investigación antropológica del mercado laboral en ciudades africanas (HART, 1973). Si bien la Organización Internacional del Trabajo enseguida relacionó la economía informal con rasgos propios de sociedades empobrecidas: escasa cualificación del capital humano, predominio de las empresas familiares que funcionan a pequeña escala, uso de tecnologías obsoletas y mercados desregularizados (SETHURAMAN, 1981), también es cierto que desde otros ámbitos se ha ligado su existencia a la expansión de fuerzas empresariales dinámicas que se ven en la necesidad de rebasar los asfixiantes corsés impuestos por regulaciones estatales excesivamente rígidas y favorecedoras de grupos privilegiados muy concretos (DE SOTO, 1989). Ya se valore de un modo u otro, un denominador común de las estructuras económicas informales es su ubicación en una extensa zona de ambigüedad legal en la que con frecuencia se diluyen los límites entre los comportamientos lícitos y los delictivos. En este sentido, y a diferencia tanto de la economía formal y como de la economía delictiva, la economía informal haría referencia a las actividades económicas inmersas de algún modo en procesos de producción y distribución ilícitos que acaban ofreciendo productos finales lícitos (CASTELLS y PORTES, 1989).

Al trasladar estas ideas a la actualidad del sistema turístico valenciano, se advierten cuestiones polémicas que deciden el día a día de los ritmos sociales. Una fundamental es la expansión de redes de relaciones económicas en las que el indiscutible ahorro de costes empresariales, a través particularmente de la evasión fiscal, se acopla a un contexto de incertidumbre e inseguridad jurídica derivada de la oferta de productos que no cumplen con las expectativas de los consumidores, de la difícil solución de los problemas de morosidad, de la comercialización irregular de alojamiento o de la indefensión ante posibles abusos a la que se exponen oferentes, demandantes, trabajadores y, en el caso del alojamiento no registrado, también los vecinos de los inmuebles. Podría decirse que demasiados elementos quedan a expensas de la confianza mutua. En el caso del desequilibrio existente entre la oferta turístico-residencial reglada y no reglada, se observa fácilmente en la Comunidad Valenciana una contraposición propia de países periféricos donde es habitual detectar una fuerte división entre, por un lado, enclaves minoritarios de economía formal en los que se impone el cumplimiento de los contratos y, por otro, una extensa actividad autorregulada fuera de él.

¿Por qué sucede esto en una sociedad avanzada como la que se conforma en la Comunidad Valenciana? Probablemente no sería difícil categorizar las posibles respuestas a esta pregunta a partir de los posicionamientos político-ideológicos de quienes las propusieran. Aquí se sugiere fijar la atención en dos factores importantes. En primer lugar, el poder de influencia que tienen las inercias históricas fraguadas en un periodo en el que las características sociológicas de la región se asemejaban más a las predominantes en lugares muy distantes (en términos políticos, económicos y culturales) de los centros tradicionales de la Europa capitalista. En este caso, la eficacia con la que, durante décadas, las redes comunitario-familiares autosuficientes y recelosas de la intervención estatal se han organizado para producir dinámicas productivas sin contar demasiado con la intervención ni con las exigencias de las instituciones que, a su vez, se habrían mostrado poco eficientes, ayudaría a entender algunos interrogantes. El desafío se fija hoy en la necesidad de modernizar no sólo las formas de proceder en el ámbito político y económico, sino los valores y actitudes que empapan toda la estructura social y que en otros momentos se mostraron válidos a la hora de orientar los pasos que debían encaminar a la Comunidad Valenciana hacia la senda de la prosperidad. Sin embargo, en el actual contexto, ese sustrato cultural dificulta la renovación de las dinámicas modernizadoras en un mundo que plantea nuevos retos. En segundo lugar, se subraya como factor clave las enormes dificultades que la economía formal está demostrando para generar empleo, provocando que las personas más cualificadas busquen trabajo en otras latitudes y las menos cualificadas prueben fortuna en los inframundos de la economía sumergida o que, sencillamente, integren el flujo monetario procedente de ésta no ya como un complemento, sino como un pilar de la economía doméstica que se combina o alterna estacionalmente y de

forma natural con los ingresos procedentes de la economía formal o de los subsidios que proporciona el Estado. Todo ello, en realidad, pondría en duda el sentido que tiene referirse al tejido económico en el que se apoya el sistema turístico-inmobiliario valenciano como propio de una sociedad avanzada.

PROPUESTAS

En este apartado se discuten algunas vías de trabajo que, si se acepta lo expuesto en los apartados anteriores, parecerían coherentes. No obstante, no tienen la vocación de ser orientadoras de nada, más allá de la posibilidad de establecer un diálogo con quien lea estas páginas y, ya puestos, de promover en el lector algunas reflexiones. Aquí se simpatiza plenamente con las líneas de intervención y regeneración que, desde la perspectiva del análisis territorial, han formulado recientemente Fernando Vera y Daniel Díez (2016, 94-96) o los redactores del proyecto ERAM (TUSET y TEMES, 2015, 144-149). A continuación se comentan algunas cuestiones en las que se entremezclan dimensiones propias del territorio con otras más relacionadas con los ámbitos socioeconómico, político y cultural.

Primera. Se muestra perentorio establecer mecanismos que prioricen el desarrollo de la economía estrictamente turística sobre la economía inmobiliaria y, ante todo, que impidan que esta última continúe instrumentalizando a la primera en su propio beneficio. Para lograrlo deben introducirse cambios legislativos que distingan la regulación de ambos sectores de actividad e implementarse medidas concretas dirigidas a acometer el gran desafío: reducir drásticamente la oferta de alojamiento residencial no reglado para reubicar toda esa actividad no sólo dentro de la legalidad sino, al mismo tiempo, dentro de los márgenes de la economía turística formal, pues, en el estado en el que se encuentra ahora parece más apropiado vincularla al negocio inmobiliario informal. Con este fin se han de invertir recursos y reorganizar las estrategias de inspección de las actividades inmobiliarias informales que se hacen pasar por turísticas y, a la vez, establecer sistemas de incentivos y sanciones que animen enérgicamente a quienes se hallan al margen de la ley a situarse dentro de sus límites.

Segunda. Tanto desde las instituciones como desde la academia debería reconsiderarse el uso que se hace de la expresión turismo residencial y, en este sentido, imitar a algunos investigadores que han decidido eludir o restringir severamente el empleo del término. Quizá el caso más ilustrativo de esta actitud se corresponda con la forma de abordar el asunto del más solvente de los investigadores en activo. Un dato que en este caso resulta relevante subrayar, pues no parece una casualidad que quien ha demostrado una trayectoria más sólida en el análisis de los nexos existentes entre la expansión urbanística y el turismo en la Comunidad Valenciana prefiera referirse a estas realidades empleando

expresiones ideológicamente menos contaminadas, como «función residencial» (VERA, 2005a) o «vertiente residencial» del turismo (VERA, 2005b y 2006). En realidad, lo que se propone es reservar el uso de esta expresión para aludir exclusivamente a la realidad en la que se está convirtiendo: una etiqueta integrada en una estrategia publicitaria al servicio de intereses político-empresariales vinculados directamente con la economía inmobiliaria. La cuestión no tendría que quedarse en el nivel semántico sino que, a partir de la restricción de su uso, habría que actuar en consecuencia y no tratar a quienes promueven la difusión del turismo residencial, principalmente los promotores inmobiliarios y sus allegados, como si fueran promotores turísticos. Cada convenio o acuerdo que se firma entre una institución pública y un lobby o asociación de promotores inmobiliarios con el pretexto de fomentar el desarrollo turístico refleja la intención de los firmantes de alimentar las lógicas de actuación sobradamente conocidas. La economía inmobiliaria debe de legislarse y ordenarse de acuerdo a su propia naturaleza y necesidades. Así pues, la participación de representantes de los intereses inmobiliarios en foros de discusión del sector turístico debe admitirse siempre y cuando todos los participantes tengan claro cuál es el papel que desempeñan en el sistema de interacciones.

Tercera. La siguiente propuesta está íntimamente relacionada con la anterior. Dado el nivel de saturación urbanística que ha alcanzado el espacio susceptible de valorarse como de interés turístico, sobre todo en la franja litoral, convendría apostar firmemente por la preservación de los parajes no violentados por la voracidad inmobiliaria. No se trataría tanto de evitar el tránsito por los mismos como de promover usos respetuosos que, al mismo tiempo, contribuyan a su mantenimiento. Al respecto de este asunto, tiene interés empezar a considerar el territorio «no como un espacio con vocación isotrópica en el sentido de que todo él tiene igual derecho a ser urbanizado, sino como un espacio que necesita de la asimetría en la relación urbanización-naturaleza para que ambas puedan subsistir armónicamente» (FARIÑA, 2006, 9). La experiencia reciente no permite ser optimistas pues exige tomar decisiones pensando en el largo plazo y no en los beneficios económicos inmediatos. De hecho, esta concepción requiere conceder al espacio no antropizado y de gran riqueza paisajística un valor esencial que debe defenderse. Ello choca frontalmente con los postulados de aquellos políticos y promotores inmobiliarios que, de un modo más o menos explícito, sostienen que la única asimetría que ha de tenerse en cuenta para incentivar el progreso es la que resulta de contraponer la existencia de espacios deprimidos, imposibles de reactivar como mercados inmobiliarios interesantes, frente a aquellos otros cuya explotación urbanística les podría continuar proporcionando buenos rendimientos crematísticos.

Cuarta. Este punto y el siguiente aluden a la necesidad de repensar los mecanismos de interacción comunicativa desde los que se plantean las

opciones posibles y se toman las decisiones finales. Una línea de trabajo útil, y digna de incentivar por quienes se preocupan de vigilar la salud democrática del sistema político en el que viven, es aquella que promueve el desarrollo de procesos de participación social (FRANCÈS, 2016). Si estos procesos se implementan adecuadamente no tienen por qué acarrear demoras inasumibles. En líneas generales, buscan comprender cómo funciona una determinada situación social repartiendo responsabilidades e incorporando a los actores implicados y a la ciudadanía interesada en los procesos conducentes a la toma de decisiones, es decir, al mayor número de quienes, en este caso, se van a ver afectados de alguna manera por las actividades turísticas. A la luz de lo expuesto en las páginas anteriores, se parte de la premisa de que nada sirve si los principales agentes con capacidad de decisión en la sociedad receptora no perciben que van a mejorar su calidad de vida con los cambios que se propongan. Por eso, parece más práctico que los procesos participativos se fomenten primordialmente, aunque no de modo exclusivo, desde el tejido institucional y empresarial. Para que los procesos sean ágiles es necesario que las administraciones públicas y el empresariado turístico sean capaces de generar ideas y proyectos de mutuo acuerdo susceptibles de, en un segundo momento, exponerse a la discusión ciudadana. Discusión en la que, imperiosamente, los mismos políticos y empresarios deben participar para presentar y responder a todas las dudas y sugerencias que los ciudadanos, ya informados y agrupados o no en asociaciones, tengan a bien plantear. Únicamente, cuando se obtenga un consenso entre todas las partes se estará en disposición de desarrollar acciones prácticas. Al evaluar la idiosincrasia del sistema turístico valenciano, es aconsejable implementar estrategias participativas con matices diferentes en función de, al menos, un criterio general: si se está o no ante un entorno social especializado en la función turístico-inmobiliaria. En el caso de hallarse ante un espacio volcado hacia la vertiente residencial, los procesos de participación han de tomar en consideración la existencia, muy probable, de un contexto de legitimación social de las dinámicas turístico-residenciales que se sostenga sobre las bases más arriba comentadas. En este caso, parece lógico integrar reuniones en los procesos deliberativos en las que se discuta la conveniencia de continuar con las dinámicas inmobiliario-residenciales si lo que se persigue es garantizar el desarrollo local futuro del municipio. Seguidamente, tendrían que promoverse discusiones en las que se debatiese acerca de las posibilidades de reorientación o complementación de las realidades existentes con alternativas articuladas sobre estrategias de diversificación de la oferta. Esas estrategias asumirían como elemento diferenciador la preservación del patrimonio natural y cultural, cuestión que, como podría constatarse a través de la ilustración de casos existentes en la propia Comunidad Valenciana, no tiene por qué ser incompatible con las demandas de los mercados con los que tradicionalmente se ha trabajado. Se trata, en definitiva, de mostrar cómo, en el medio y largo plazo, pueden revitalizarse dinámicas soterradas por la exacerbación de las inercias

inmobiliarias que contribuyan a mejorar la calidad del destino y, en consecuencia, a atraer a turistas más exigentes, respetuosos y con una mayor capacidad de gasto (ver, al respecto, la noticia publicada en el diario *Información* el 5 de julio de 2016 con el titular: «El gasto medio diario de los turistas extranjeros en Alicante cae un 6% y es el más bajo de toda España»). Por otro lado, en el caso de encontrarse ante una realidad social con dinámicas turísticas incipientes o inexistentes, las propuestas deben debatirse tras explicar con claridad y en detalle los riesgos que entraña para el desarrollo local dejarse llevar por lógicas cortoplacistas ligadas a las dinámicas residenciales e, igualmente, hacer hincapié en la necesidad de articular cualquier proyecto alrededor de principios básicos de sostenibilidad económica (garantizando la contratación prioritaria de población local), cultural (garantizando la protección del entorno construido y el respeto por los hábitos, costumbres y otros rasgos identitarios que los residentes valoren relevantes) y ambiental (garantizando una intervención sobre el entorno natural compatible con la conservación de la riqueza ecológica).

Quinta. Lo expuesto en el punto cuarto exige un cambio de perspectiva que permita el desarrollo de planes de trabajo en una escala multinivel y, como mínimo, supramunicipal. Con multinivel se hace referencia al ineludible interés que supone la implicación y colaboración positiva en las estrategias de desarrollo turístico de administraciones públicas municipales, provinciales y autonómicas e, igualmente, de agentes del sector privado liderados por empresas representativas de la economía turística en la que se incluyan perfiles diferentes: consolidadas asociaciones de hoteleros, por ejemplo, junto a pymes jóvenes con proyectos innovadores que puedan beneficiar a distintos actores del sistema. Para que esta colaboración multinivel entre diversas estructuras empresariales funcione se requiere avanzar en la modernización de la cultura empresarial valenciana. Condición sin la cual será complicado superar la dificultad que entraña a los recién llegados introducirse en espacios tradicionalmente organizados por sistemas de alianzas demasiado rígidos y modos de proceder arraigados que, a pesar de haber funcionado bien durante mucho tiempo, deben tener la suficiente altura de miras como para fomentar tanto la autocrítica como la generación de ideas innovadoras desde su interior y, también, desde agentes periféricos a los núcleos del sistema. De ese modo, y sin que ello implicara el abandono de su actividad como grupos de presión, podrían mejorar su disposición para configurar una industria turística de más calidad, diseñando productos ampliados fruto de las sinergias creadas. Las dificultades ante las que se enfrenta el objetivo de promover la colaboración supramunicipal son, quizá, las más complicadas de resolver. Las tensiones en el interfaz administrativo regional-local son habituales en todos los países de la Unión Europea, especialmente cuando se intercalan gobiernos de distintas siglas políticas, pero la virulencia con la que se manifiestan en el caso español, plasmada en una cultura de desobediencia promovida desde las propias instituciones y en la utilización de los tribunales de justicia

como recurso cotidiano para dirimir las controversias políticas, adquiere un carácter singular (HILDENBRAND, 2006). Así, un localismo a menudo mal entendido junto al déficit de cultura democrática que impregna a gran parte del entramado político, y que está en la base del creciente descrédito con el que la ciudadanía lo percibe, se reconocen como escollos muy difíciles de sortear a la hora de encauzar el desarrollo sostenible del sistema turístico valenciano.

BIBLIOGRAFÍA

CAPDEPÓN, M. 2016. «Conflictos ambientales derivados de la urbanización turístico-residencial. Un caso aplicado al litoral alicantino». *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 71, 31-57.

CASTELLS, M. y PORTES, A. 1989. «World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy», en Portes, A.; Castells, M. y Benton, L.A. (eds.). *The Informal Economy. Studies in Advanced and Less Developed Countries*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 11-37.

DE SOTO, H. 1989. *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*. New York: Harper and Row.

FARIÑA, J. 2006. «Asimetría e incertidumbre en el paisaje de la ciudad sostenible». *Ingeniería y territorio*, 75, 4-9.

FRANCÉS, F. 2016. *Metodologías participativas para la investigación y la intervención social*. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante.

FUSTER, B.; LILLO, A.; MARTÍNEZ, C. y RAMÓN, A. 2010. «Crecimiento internacional de cadenas hoteleras vacacionales españolas desde una perspectiva global». *Cuadernos de Turismo*, 25, 69-97.

HART, K. 1973. «Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana». *Journal of Modern African Studies*, 11, 61-89.

HILDENBRAND, A. 2006. «La política de ordenación del territorio de las comunidades autónomas: balance crítico y propuestas para la mejora de su eficacia». *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, 230, 79-139.

HUETE, R. 2009. *Turistas que llegan para quedarse. Una explicación sociológica sobre la movilidad residencial*. Alicante: Universidad de Alicante.

–; BROTONS, M. y SIGÜENZA, M.C. 2016. «La desigualdad entre mujeres y hombres en el sector hostelero español». *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 25, 73-87.

– y MANTECÓN, A. 2010. «Los límites entre el turismo y la migración residencial. Una tipología». *Papers. Revista de Sociologia*, 95(3), 781-801.

– y –. 2011. «Más allá del turismo: movilidad residencial europea y nuevos núcleos urbanos». *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 56, 111-128.

– y –. 2012. «Residential tourism or lifestyle migration. Social problems linked to the non-definition of the situation», en Moufakkir, O. y Burns, P. (eds.). *Controversies in Tourism*. Wallingford: CABI, pp. 160-173.

– y –. 2013. «La migración residencial de noreuropeos en España». *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 61, 219-245.

MANTECÓN, A. 2008. *La experiencia del turismo. Un estudio sociológico sobre el proceso turístico-residencial*. Barcelona: Icaria.

–. 2010. «Tourist modernisation and social legitimation in Spain». *International Journal of Tourism Research*, 12(5), 617-626.

–. 2012. «El nexo entre urbanización y turismo. Análisis de la opinión pública». *Papers. Revista de Sociologia*, 97(1), 249-272.

MAS, V. 2015. «El proyecto ERAM», en Tuset, J.J. y Temes, R. (coords.). *Orilla marítima. Territorio litoral*. Valencia: General de ediciones de Arquitectura, pp. 4-7.

MEMBRADO, J.C. 2011. «Cartografía del urbanismo expansivo valenciano según SIOSE», en Gozávez, V. y Marco, J.A. (eds.). *Urbanismo expansivo. De la utopía a la realidad*. Madrid: Asociación de Geógrafos Españoles, pp. 427-438.

–. 2015. «Migración residencial y urbanismo expansivo en el Mediterráneo español». *Cuadernos de Turismo*, 35, 259-285.

MURRAY, I. 2015. *Capitalismo y turismo en España. Del milagro económico a la gran crisis*. Barcelona: Alba Sud.

OBIOL, E. y PITARCH, M.D. 2011. «El litoral turístico valenciano. Intereses y controversias en un territorio tensionado por el residencialismo». *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 56, 177-200.

PERLES, J.F.; RAMÓN, A.B.; SEVILLA, M. y MORENO, L. 2016. «Unemployment effects of economic crises on hotel and residential tourism destinations: the case of Spain». *Tourism Management*, 54, 356-368.

PORTES, A. 2013. *Sociología económica. Una investigación sistemática*. Madrid: CIS.

RAMÓN, A.B. 2002. *La expansión internacional del sector hotelero español*. Alicante: CAM.

– 2010. *Evolución en las estrategias de expansión internacional del sector turístico vacacional: el papel de las empresas españolas en Latinoamérica*. Santiago de Chile: CEPAL.

–; PERLES, J.F. y SUCH, M.J. 2016. «Impacto económico del turismo». *Canelobre*, 66, 77-83.

REQUEJO, J. 2007. «Turistas: del concepto legal a la compleja realidad del actual panorama español». *Estudios Turísticos*, 172/173, 147-156.

SETHURAMAN, S.V. 1981. *The Urban Informal Sector in Developing Countries*. Geneva: ILO.

SIGÜENZA, M.C.; BROTONS, M. y HUETE, R. 2013. «Evolución de la desigualdad por género del empleo turístico en España». *Rotur. Revista de ocio y turismo*, 6, 182-200.

TUSET, J.J. y TEMES, R. (coords.). 2015. *Orilla marítima. Territorio litoral*. Valencia: General de ediciones de Arquitectura.

VERA, F. 2005a. «El auge de la función residencial en destinos turísticos del litoral mediterráneo: entre el crecimiento y la renovación». *Papers de Turisme*, 37/38, 95-114.

– 2005b. «El territorio ¿argumento del turismo?», en Romero, J. y Alberola, M. (eds.). *Los límites del territorio: El País Valenciano en la encrucijada*. Valencia: Universidad de Valencia, pp. 293-297.

– 2006. «Agua y modelo de desarrollo turístico: la necesidad de nuevos criterios para la gestión de los recursos». *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 42, 155-178.

– e IVARS, J. 2003. «Measuring Sustainability in a Mass Tourist Destination: Pressures, Perceptions and Policy Responses in Torrevieja, Spain». *Journal of Sustainable Tourism*, 11(2-3), 181-203.

– y DÍEZ, D. 2016. «Espacios y destinos turísticos». *Canelobre*, 66, 85-97.